

## ¿PARA DONDE VA ECUADOR?

Durante la última década, Ecuador ha emergido silenciosamente como una pieza clave del comercio mundial de drogas, con hasta un tercio de la producción récord de cocaína de Colombia ahora exportada a través de este país.

La cocaína producida en el sur de Colombia es traficada a Ecuador a través de las provincias fronterizas sin ley, de Esmeraldas y Sucumbíos por grupos mafiosos de las ex-FARC y El Cartel de Sinaloa de México que también ha hecho sentir su presencia. Estas redes han penetrado en el Estado, contaminando las fuerzas de seguridad, el poder judicial y los más altos niveles de gobierno.

Se presta poca atención a Ecuador. La tasa de homicidios es baja y no existen carteles de la droga como los que han dominado el panorama criminal en México y Colombia. Sin embargo, Ecuador es una de las superautopistas de cocaína del mundo. Así le gusta al narcotráfico internacional algo de bajo perfil.

Más de un tercio de la floreciente producción de cocaína de Colombia ahora fluye hacia Ecuador, según fuentes antinarcóticos. Desde los puertos, costas y aeropuertos del país, se despacha a todo el mundo, con destino a Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

Detrás de este comercio hay un submundo complejo y fluido de grupos de especialistas y subcontratistas coordinados por los intermediarios de poderosas organizaciones transnacionales de narcotráfico y protegidos por redes de corrupción que penetran profundamente en el estado.

El papel de Ecuador en el tráfico de drogas se remonta a la década de 1980, cuando era una ruta de tránsito para la base de coca peruana traficada hacia Colombia, y sede de redes de tráfico de precursores químicos que abastecían a los laboratorios colombianos que procesaban esa base en cocaína.

Sin embargo, no fue sino hasta el cambio de siglo que el Ecuador emergió como la piedra angular de la cadena transnacional de suministro de cocaína. Comenzó con la dolarización de la economía en respuesta a una crisis económica y política en 2000, que instantáneamente convirtió a Ecuador en el sueño de un lavado de dinero un país fronterizo con el mayor productor de cocaína del mundo que usa la moneda del mercado de cocaína más grande del mundo.

Casi al mismo tiempo, las operaciones intensas de las Fuerzas Armadas de Colombia y una fumigación aérea masiva de cultivos de coca en Colombia empujaban tanto a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC como a los cultivos de coca hacia la frontera con Ecuador. Las FARC establecieron el control sobre la producción de cocaína en la región y

comenzaron a abastecer a los traficantes del Cartel del Norte del Valle , quienes abrieron rutas hacia y desde Ecuador. Los mexicanos pronto quisieron participar en la acción, y el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", ordenó a sus lugartenientes que establecieran sus propias redes en el país.

La convergencia de estas fuerzas criminales en Ecuador coincidió con un punto de inflexión en la historia política y criminal del país las elecciones presidenciales de 2006 que llevaron al poder a Rafael Correa.

La administración de Correa resultaría una paradoja. Supervisó una caída dramática en la violencia e incautaciones récord de drogas al mismo tiempo que trajo una era de estabilidad política sin precedentes. Pero su gobierno estuvo plagado de escándalos de narcotráfico, y su estilo de hombre fuerte debilitó la capacidad del Estado ecuatoriano y la sociedad civil para resistir el narcotráfico.

Uno de los primeros movimientos de Correa como presidente fue poner fin al arrendamiento de la base naval estadounidense en Manta, una promesa electoral hecha a las FARC a cambio de financiamiento de campaña, según comunicaciones recuperadas de la guerrilla, en los computadores incautados en la operación donde se dio de baja a Raúl Reyes uno de los comandantes de las FARC, aunque Correa niega tener conocimiento de esto . La decisión creó un enorme punto ciego en las aguas y cielos de Ecuador que pronto se llenó de narcotraficantes y aviones.

El cierre de Manta fue solo el comienzo de un enfoque antagónico de política exterior que vio a su gobierno pelear con Colombia y Estados Unidos. Como resultado, la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se redujo al mínimo.

Las políticas internas de Correa también crearon un espacio para que floreciera el narcotráfico. Politizó el poder judicial , usándolo como una herramienta para derrotar a los opositores. También hizo que las fuerzas de seguridad y las unidades de inteligencia dejaran de combatir el crimen organizado y, en cambio, los volvió contra sus adversarios políticos, y amedrentó a la prensa y a los organismos de control no gubernamentales con su retórica feroz y sus acciones legales.

La administración de Correa redujo la resistencia de Ecuador al narcotráfico en un momento crucial. Más de una década después de su elección, Ecuador es ahora un refugio del crimen organizado y posiblemente el principal punto de despacho de cocaína fuera de Colombia.

Hay dos caminos que toma la cocaína a través de Ecuador la ruta del Pacífico y la ruta del Amazonas.

La ruta del Pacífico se abastece en gran parte de la cocaína producida en Nariño, el departamento fronterizo. Las drogas ingresan a Ecuador en pequeñas embarcaciones que navegan por las enmarañadas vías fluviales de la selva que convergen en el río Mataje que separa Nariño de la provincia ecuatoriana de

Esmeraldas, o escondidas en vehículos que cruzan el puente internacional Rumichaca hacia la provincia de Carchi.

Los envíos se recogen en puntos de escondite cerca de la frontera. La droga que cruza a Esmeraldas se esconde en propiedades y playas que salpican el litoral esmeraldense, mientras que las cargas que transitan por Carchi se almacenan en fincas y estancias en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Luego, algunas cargas son movidas por botes que bordean la costa y se esconden en escarpadas ensenadas. La mayoría de las drogas, sin embargo, se transportan por carretera, escondidas en camiones comerciales, vehículos privados e incluso transporte público.

La ruta del Amazonas se abastece principalmente de cocaína desde Putumayo, el segundo departamento colombiano con los niveles más altos de cultivo de coca después de Nariño, y pasa por la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

Los principales cruces fronterizos son los ríos San Miguel y Putumayo, donde pequeñas embarcaciones depositan cargas en puntos de escondite en puestos de avanzada, como Puerto Nuevo, Puerto Mestanza y Tarapoa. Sin embargo, las drogas también se mueven directamente a través del puente internacional de San Miguel después de ser cargadas en vehículos en Colombia. Desde Sucumbíos, los traficantes toman las principales carreteras del país hasta los puntos de despacho.



Cifras obtenidas de fuentes antinarcóticos, muestran que en 2018 el 44 por ciento de las incautaciones de drogas tuvieron como destino Estados Unidos, el 22 por ciento para Europa, el 4 por ciento para Centroamérica, el uno por ciento para Asia y Oceanía, mientras que el 28 por ciento fue desconocido. El mercado de EE. UU. es abastecido principalmente por barcos lanzados desde la costa y aviones ligeros, mientras que la cocaína se envía a Europa en cargamentos contaminados.

Actualmente, el grueso de la cocaína que se embarca desde Ecuador para el mercado estadounidense se despacha desde las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y en menor medida Guayas y El Oro en lanchas a motor, aunque los traficantes también utilizan embarcaciones pesqueras, sumergibles y despojadas. salen embarcaciones con cubiertas de fibra de vidrio que las autoridades antinarcóticos denominan Vehículos de Perfil Bajo (LPV).

El tráfico a menudo comienza con un secuestro. Tripulaciones de piratas acechan frente a la costa, acechando a los pescadores para robarles sus botes y motores fuera de borda a punta de pistola. Luego, los botes son tripulados con tripulaciones reclutadas de pueblos de pescadores, donde \$ 30,000 dolares por un viaje de cinco días es una propuesta atractiva, a pesar del riesgo de que terminen uniéndose a cientos de otros pescadores ecuatorianos en prisiones extranjeras, o estarán entre los muchos otros que desaparecen sin dejar rastro.

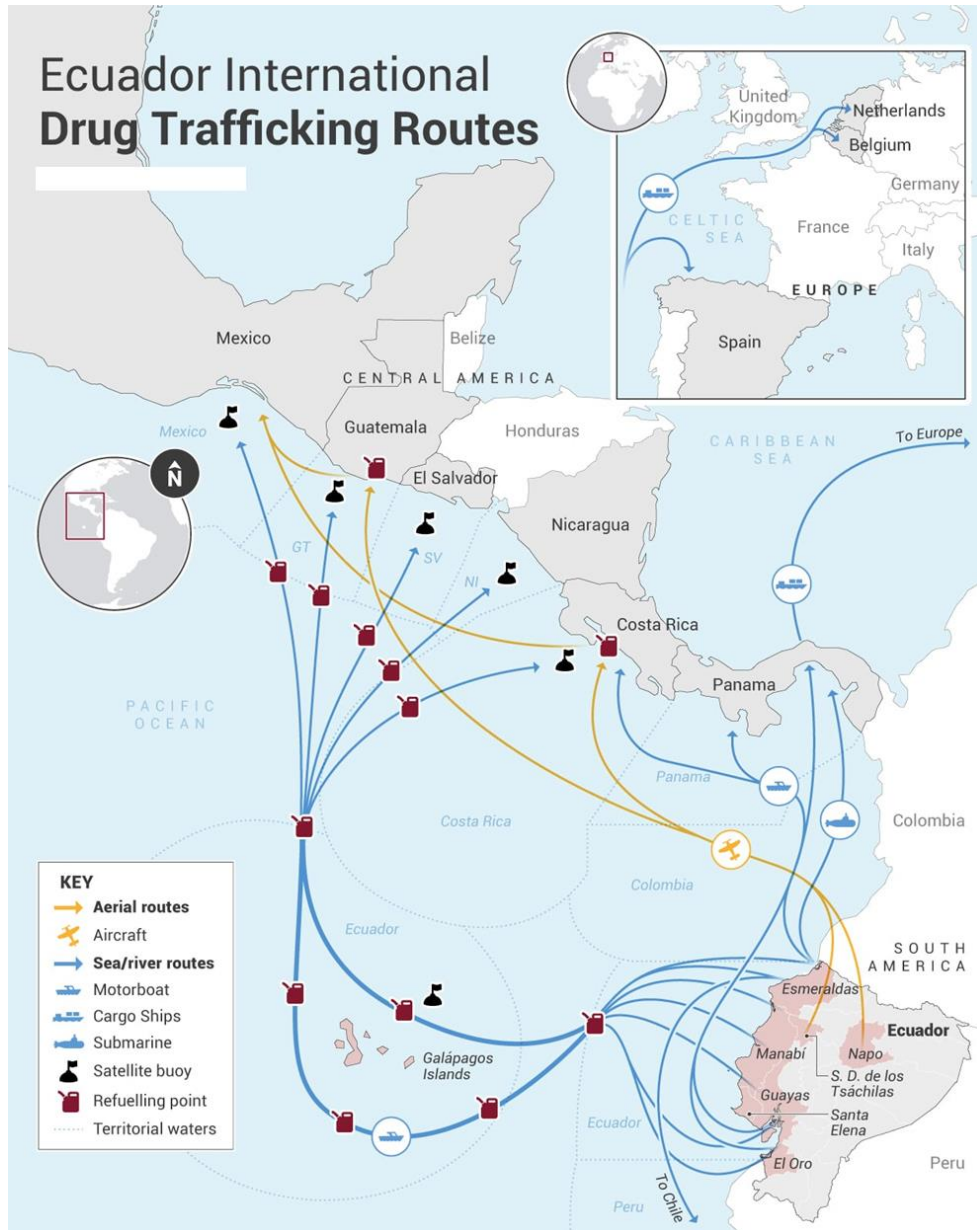
Los traficantes pueden elegir entre tres rutas. Desde Esmeraldas pueden hacer un viaje directo a América Central, pero esto los acerca peligrosamente a las patrullas estadounidenses y colombianas. En cambio, la mayoría prefiere recorrer el norte o el sur de las Islas Galápagos. La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de EE. UU. más reciente estimó que en 2021, el 17 por ciento de toda la cocaína con destino a EE. UU. pasó por primera vez por las islas Galápagos, frente a solo el 4 por ciento en 2016 y el 1 por ciento en 2015.

Los barcos que utilizan los traficantes para las rutas del Pacífico no están equipados para viajes de larga distancia en alta mar y deben repostar hasta seis veces en el camino. El combustible lo proveen las embarcaciones pesqueras, que salen de la ciudad de Manta cargadas de gasolina y un teléfono satelital y esperan en lugares previamente acordados. Los barcos de pesca llevan cinco tanques a la vez, lo que les permite repostar varios barcos. Cada tanque se vende por \$ 35,000, lo que potencialmente les permite ganar \$ 175,000 por viaje de 1 a 2 semanas.

Los viajes de los traficantes suelen terminar en las costas del Pacífico de México o Centroamérica, sobre todo Guatemala o Costa Rica. Aquí pueden ser recibidos por botes para entregar cargas, pero el miedo a ser traicionados ha impulsado el uso de radios con GPS o boyas satelitales. Esto les permite tirar sus envíos por la borda antes de pasar las coordenadas a las tripulaciones de recogida, que los encuentran siguiendo las señales emitidas por las boyas.

Si bien los despachos costeros siguen siendo el método principal para el tráfico de cocaína con destino a EE. UU., el uso de Ecuador como puente aéreo va en aumento, como resultado, de una mayor presión sobre las rutas marítimas.

Los traficantes en su mayoría usan aviones Cessna que están desmantelados y modificados para que puedan transportar más drogas y combustible, e incluso son capaces de reabastecerse de combustible en el aire. Estos aviones pueden transportar entre 400 y 700 kilos, y tardan unas seis horas en llegar a Costa Rica o Guatemala, donde descargan o repostan y continúan hacia México.



Los aviones despegan utilizando una variedad de pistas de aterrizaje clandestinas o improvisadas. Los traficantes construyen pistas de aterrizaje al nivelar la tierra en

áreas aisladas, usan franjas existentes en propiedades privadas o comerciales, como las franjas que se usan para fumigar aviones en plantaciones de frutas, o usan aeropuertos abandonados o incluso caminos cerrados por construcción.

Sin embargo, para la cocaína enviada a Europa, las rutas principales pasan por los puertos de Ecuador: Puerto Bolívar y, sobre todo, el centro de comercio internacional del país, Guayaquil. El control de los puertos es bajo, mientras que la corrupción es alta y los traficantes tienen una variedad de opciones para secuestrar la carga que se mueve a través de ellos.

Algunos buscan el control total del envío utilizando empresas de exportación de fachada para sus envíos. Estas empresas ficticias se crean a nombre de testaferros, comúnmente personas con pocos recursos económicos y sin antecedentes penales. En otros casos, compran empresas existentes con un largo historial de exportaciones limpias para reducir el riesgo de que reciban algo más que una inspección superficial. Luego se organizan envíos de exportación ostensiblemente legales y la cocaína se oculta dentro de los productos.

Sin embargo, una técnica más común es la de contaminar los cargamentos legales, escondiendo la droga en los contenedores ya sea antes de que ingresen al puerto, en el puerto o después de que los barcos dejen los muelles.

Para llevar sus drogas a los cargamentos antes de ingresar al puerto, los traficantes no apuntan a las mercancías sino a los contenedores mismos. Embalan los estupefacientes en compartimentos en el piso, el techo o las paredes de los contenedores vacíos en los patios de almacenamiento y luego usan los contactos en las compañías navieras para asegurarse de que su contenedor se envíe a una empresa que planea exportar a su destino objetivo.

Los contenedores también pueden contaminarse después de ingresar al distrito portuario. Camiones de carga con drogas escondidas en compartimentos secretos ingresan al distrito y se mueven a puntos ciegos conocidos en la cobertura de cámaras de seguridad para descargar. Los trabajadores portuarios luego abren los contenedores y cargan las drogas entre los productos legales. Luego se coloca un sello personalizado clonado o falso para enmascarar la manipulación.

Los contenedores e incluso los propios barcos también pueden contaminarse después de haber zarpado. Botes más pequeños se acercan a los barcos en los esteros de Guayaquil y pasan la droga a los contactos entre la tripulación, quienes la empaquetan en un contenedor o en un escondite a bordo.

Los actores que manejan estas rutas de la droga son una combinación de redes criminales ecuatorianas, colombianas, mexicanas y europeas.

Los traficantes de cocaína colombianos, como el grupo criminal La Constru en Putumayo y el misterioso narcotraficante conocido solo como "El Contador" en

Tumaco, negocian tratos en Colombia o en centros criminales ecuatorianos como Lago Agrio cerca de la frontera con Putumayo y Guayaquil.

Los tratos alcanzados son por una cantidad de cocaína “puesto en”, o entregada. Para los cárteles mexicanos en particular, la entrega puede ser alrededor de la frontera con Colombia. Sin embargo, los traficantes colombianos también pueden organizar la entrega en puntos de despacho en Ecuador o en puntos de entrega en Europa o frente a las costas de México y América Central.

Estos intermediarios de cocaína subcontratan el trabajo de obtención y transporte de cocaína a los proveedores de servicios criminales que operan en cada eslabón de la cadena.

En la región fronteriza, los actores clave son las redes que quedaron de la desmovilización de las FARC, que están activas en ambos lados de la frontera. Células guerrilleras rearmadas y criminalizadas se encargan de acopiar cargamentos en Colombia y garantizar su transporte seguro hacia Ecuador. El tráfico se coordina utilizando los especialistas en logística y transporte y las redes de funcionarios corruptos que solían trabajar en el tráfico de cocaína producida por las FARC.

El traspaso de las redes de transporte a las redes especializadas de despacho ecuatoriano. Estas organizaciones sofisticadas y de bajo perfil están dirigidas por traficantes individuales, muchos de los cuales viven disfrazados entre las élites sociales, económicas y políticas regionales.

Estos traficantes organizan la logística de un envío: coordinan redes de corrupción, reclutan contrabandistas, aseguran combustible, equipos y cualquier otro suministro necesario. También contratan a actores armados para brindar seguridad, cobrar deudas y cometer asesinatos.

Todos los diferentes métodos de tráfico exigen diferentes capacidades logísticas y contactos, y aunque se sabe que algunos traficantes trabajan con diferentes métodos, la mayoría están especializados.

Los cargamentos costeros son organizados por clanes del crimen, muchos de los cuales se concentran en la ciudad de Manta. Estas redes reclutan pescadores de las comunidades costeras para que tripulen sus botes, organicen paradas para repostar y equipen los botes con equipos y suministros de comunicaciones.

Además de garantizar el acceso a las pistas de aterrizaje, las redes que envían cargamentos en avionetas proporcionan combustible a través de contactos corruptos del sector privado o del estado, equipos de comunicación que les permiten coordinarse con los pilotos entrantes y matrículas clonadas de aviones con permiso para volar en el área donde estarán aterrizando.

Para los despachos portuarios, la clave son los contactos corruptos. Para contaminar los contenedores antes de cargarlos, necesitan contactos en las navieras, sobre todo con los despachadores de contenedores que controlan qué contenedores se envían a qué empresas, y en los patios de almacenamiento para que trabajen en la carga de la droga. Si contaminan contenedores dentro del distrito portuario, necesitan camioneros, estibadores, guardias de seguridad y operadores de cabrestantes que tengan acceso a la información sobre los movimientos y ubicaciones de los contenedores. Estos traficantes y las rutas que controlan están protegidos por redes de corrupción.

Policías y militares no solo pasan por sus controles cargamentos de droga, sino que incluso han brindado seguridad a los cargamentos de droga y a sus traficantes, transportado cocaína en sus vehículos oficiales e incluso han llevado a cabo asesinatos, según fuentes de inteligencia.

Si se atrapa a los traficantes, la mayoría puede comprar su libertad para salir del problema. Pagan a los fiscales y jueces para sabotear las investigaciones y obtener fallos favorables. Los traficantes también pueden recurrir a los políticos que están en su nómina, quienes influyen para poner fin a sus problemas.

Si bien tal corrupción ha estado presente en Ecuador desde el narcotráfico, fuentes coinciden en que bajo Rafael Correa alcanzó proporciones epidémicas, arraigándose en todos los poderes del Estado.

La elección de 2017 del presidente Lenín Moreno prometía un nuevo enfoque. Moreno se acercó a los socios internacionales distanciados por Correa. El apoyo renovado de Estados Unidos ha aumentado enormemente la capacidad de Ecuador para rastrear barcos de drogas, mientras que la estrecha cooperación con Colombia permitió a los dos países cazar al criminal más buscado de la región fronteriza y desmantelar una gran parte de su red.

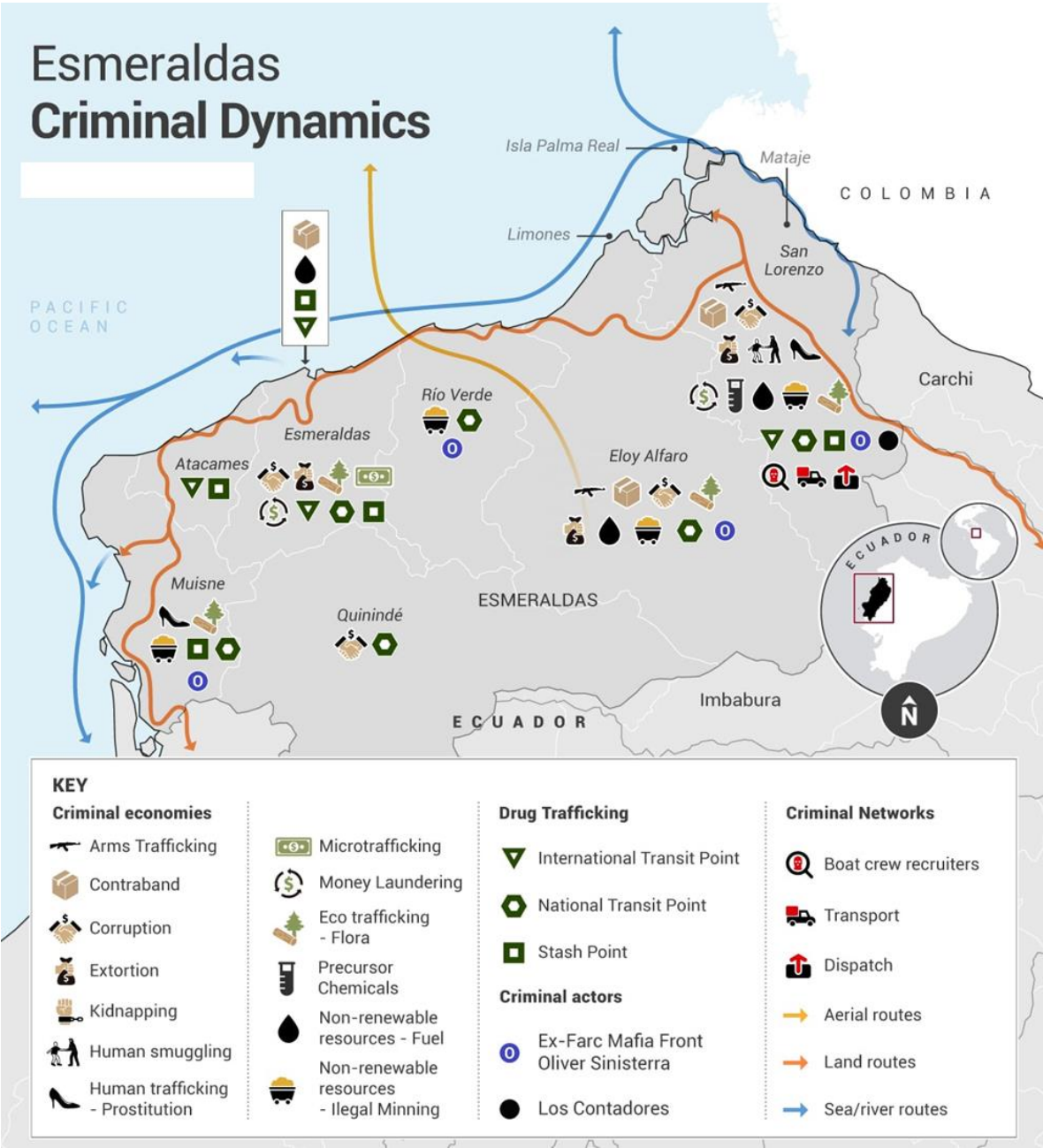
Moreno también supervisó el arresto de importantes figuras políticas por cargos de corrupción y prometió investigar los vínculos entre Rafael Correa y grupos del hampa, aunque los partidarios de Correa y otros críticos denuncian esto como una purga política disfrazada de campaña anticorrupción.

Sin embargo, cuando una ola de protestas públicas se convirtió en violentos disturbios en octubre de 2019, el terreno político volvió a cambiar. Moreno culpó a los leales a Correa y a grupos con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico por secuestrar lo que había comenzado como una protesta indígena contra los subsidios a los combustibles. Una cosa está clara la polarización y la crisis política que desencadenaron las protestas ahora amenazan con terminar con su administración, sacando el narcotráfico de la agenda y devolviéndolo a donde prospera en las sombras.

Para la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en el lado Pacífico de la frontera con Colombia, 2019 comenzó con una advertencia de que los horrores del año pasado



no fueron una aberración. Enero comenzó con una serie de asesinatos y cadáveres mutilados un cuerpo con la lengua arrancada de la garganta, otro con la cara partida a machetazos y los brazos amputados a los costados. Las imágenes circularon entre los vecinos, pasaron de teléfono a teléfono a través de las redes sociales. El mensaje fue claro a pesar de un despliegue militar sin precedentes, la región fronteriza de Esmeraldas sigue siendo dominio de narcotraficantes y grupos armados.



En la isla de Palma Real, en el extremo occidental de la frontera, la aparente calma se ve socavada por el miedo y la paranoia. Los residentes no hablan libremente, a

pesar de la presencia permanente de una unidad de fuerzas especiales. Oídos y ojos criminales permanecen en cada esquina.

La ubicación de Palma Real en la desembocadura del río Mataje la convierte en un centro de inteligencia del tráfico de drogas, y los traficantes utilizan la isla y sus pescadores para vigilar los movimientos a lo largo de una de las arterias de tráfico más importantes de la región. Mientras tanto, su aislamiento lo convierte en un retiro favorito del inframundo.

Signos reveladores de la influencia del narcotráfico agrietan la fachada idílica del pequeño pueblo. Barcos nuevos y relucientes se balancean junto a los barcos gastados y maltratados que componen la mayor parte de la flota de la isla, barcos comprados por aquellos que han llevado drogas a América Central, según los lugareños. Las pequeñas chozas con parlantes que bordean la calle que conduce al muelle están bien provistas de whisky caro para satisfacer las demandas de los narcotraficantes que llegan en bote para ir de fiesta.

Sin embargo, la señal más clara de que el conflicto de las drogas ha llegado a la ciudad son los acentos colombianos que suenan esporádicamente. En marzo, más de 150 colombianos del municipio fronterizo de Tumaco descendieron repentinamente a Palma Real. Los colombianos, de varios caseríos ubicados a lo largo de una importante arteria del narcotráfico, habían sido expulsados de sus hogares por combates entre grupos criminales rivales.

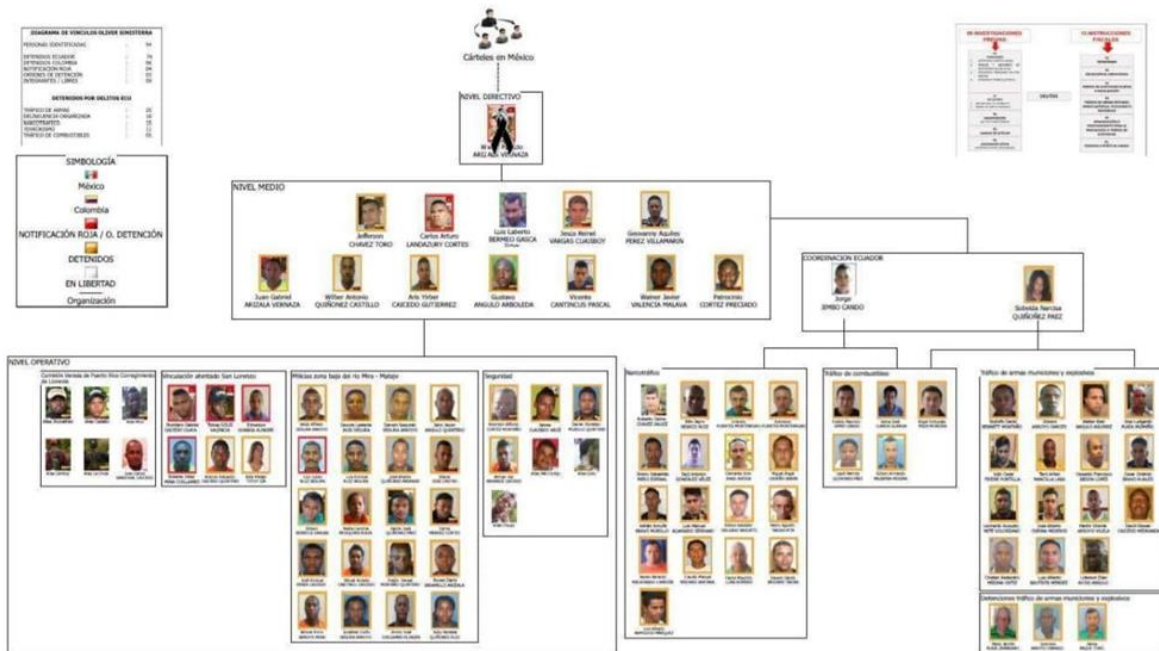
Los enfrentamientos comenzaron cuando los narcotraficantes que los lugareños estaban acostumbrados a ver pasar fueron emboscados por otro grupo, fuertemente armado y con uniforme militar.

Durante más de dos semanas, el conflicto se propagó de pueblo en pueblo, dejando a los residentes atemorizados y escondidos.

Los narcotraficantes originales finalmente repelieron el ataque y la lucha amainó, pero la mayoría de los desplazados tenían poca intención de regresar. El conflicto detrás del desplazamiento es una posdata de la violencia que ha ido desgarrando a Esmeraldas desde el 2018.

Comenzó en el remanso costero destartado de San Lorenzo. En enero de 2018, un coche bomba explotó frente a la sede de la policía y dejó 28 heridos, entre ellos varios policías. El ataque fue atribuido al Frente Oliver Sinisterra (Frente Oliver Sinisterra - FOS). Las FOS son la nueva encarnación del ala narcotraficante de la ahora desmovilizada Columna Móvil Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los dirigía un ecuatoriano que pronto se convertiría en el criminal colombiano más notorio Walter Patricio Arizala, alias "Guacho".

**DIAGRAMA DE VINCULOS GDO OLIVER SINISTERRA MAS REDES DE APOYO DETERMINADOS POR INTELIGENCIA**



Vínculos delictivos del Frente Oliver Sinisterra (Ex-FARC Mafia) Son disidentes, pero no son como los demás, son narcotraficantes.

La bomba fue solo el comienzo. Durante los siguientes cuatro meses, el FOS tendió una emboscada a las fuerzas de seguridad y voló la infraestructura eléctrica. Organizaron dos secuestros que terminaron en asesinatos, capturando y luego ejecutando a dos periodistas ecuatorianos y su conductor, que cubrían la crisis de seguridad. La violencia marcó un alejamiento de lo que había sido una coexistencia pacífica entre Guacho y el Estado ecuatoriano.

La adquisición de FOS de la región había sido inicialmente perfecta. Cooptaron las antiguas redes de apoyo de las FARC, que proporcionaban inteligencia y rutas para el movimiento de drogas, precursores y armas. Las redes de apoyo también proporcionaron escondites, refugio para las unidades de FOS y las ayudaron a planificar y llevar a cabo ataques. Las investigaciones revelaron un pequeño equipo de milicianos del FOS ecuatoriano que coordinaba las acciones.

Mientras las fuerzas del FOS estuvieran concentradas en Colombia, se moverían libremente por las comunidades ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, ganándose comunidades ofreciendo regalos y organizando fiestas.

El FOS también heredó el pacto de no agresión entre las FARC y las autoridades ecuatorianas en la región fronteriza. No está claro si se trató de una alianza pagada, o de un acuerdo tácito. Sin embargo, cualquiera que fuera el trato, en enero de 2018 Guacho lo consideró roto.

La campaña de Guacho, y en particular el secuestro de los periodistas rompió todas las reglas. La violencia era demasiada para dejarla sin respuesta. Provocó una respuesta militar masiva en ambos lados de la frontera, y Ecuador y Colombia comenzaron a cooperar estrechamente para cazar a Guacho y el FOS.

En Ecuador, los investigadores comenzaron a dismantelar su red y finalmente realizaron 75 arrestos de presuntos miembros de la milicia FOS y redes de apoyo, 62 de ellos ecuatorianos. En Colombia, en tanto, rastrearon el botín principal: el propio Guacho, asesinando al líder del FOS en diciembre de 2018.

El liderazgo del FOS pasó a Carlos Arturo Landázuri, alias “El Gringo”, pero ya comenzaban a mostrarse grietas en la organización que heredó miembros del FOS se separaron para unirse a un grupo encabezado por Mario Cabezas Muñoz, alias “Mario Lata”, otro excombatiente de las FARC con una larga trayectoria en el narcotráfico, Lata y su reforzado ejército criminal lanzaron un asalto contra el FOS, tomando territorio en Colombia y avanzando hacia Ecuador.

Los primeros signos de cómo podría ser la nueva era fueron los brutales asesinatos del cambio de año. En un caso, el cuerpo horriblemente mutilado fue arrojado deliberadamente en un lugar por el que acababa de pasar una patrulla policial y al que pronto regresaría.

La policía cree que las víctimas probablemente habían sido identificadas como informantes, pero, aunque los motivos exactos de los asesinatos no están claros, los investigadores no tienen dudas de que la violencia brutal utilizada fue un mensaje creando miedo en la población para que nadie diga nada.

Ese miedo impregna al Palma Real. Los lugareños dicen que las fuerzas de Mario Lata han llegado a la frontera, y en Palma Real ha volteado a los colaboradores de FOS y los ha puesto a trabajar tratando de asegurar un punto de apoyo en la isla. Hay pocas perspectivas de un combate como el de Tumaco, o los ataques lanzados por Guacho. Pero los líderes comunitarios expresaron un temor diferente que podrían terminar siendo el próximo mensaje.

En enero de 2019, hombres fuertemente armados que viajaban en un camión y en una motocicleta emboscaron a un pequeño grupo de agentes antinarcóticos en Sucumbíos, la provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia en la región amazónica. El tiroteo que siguió dejó un agente muerto y dos más gravemente heridos.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue silenciada. Algo en la historia no estaba bien las autoridades no pudieron explicar qué hacían los agentes, armados levemente y en un pequeño grupo, recorriendo un conocido narcopueblo, un lugar que existe al margen de la ley.

La protesta inicial pronto se apagó; no hubo despliegue militar, ni grupo de trabajo ni investigación especial. En cambio, toda la unidad antinarco de Sucumbíos fue silenciosamente transferida y reemplazada.

Washington Prado Alava, alias "Gerald" se ha convertido en uno de los narcotraficantes más notorios que ha producido Ecuador. Pero su caída ha sido igual de dramática, exponiendo no solo la violencia y la traición características del tráfico de cocaína, sino también la corrupción del Estado ecuatoriano.

La investigación que conduciría a la caída de Gerald no fue provocada por un robo de cocaína o una narco-pelea, sino por el asesinato de un trabajador de la construcción. El trabajador había construido instalaciones seguras especiales en las propiedades de Gerald donde podía esconder el efectivo que ganaba más rápido de lo que podía lavar. Cuando desaparecieron millones de dólares de estas casas de seguridad, Gerald culpó al trabajador y el trabajador pagó con su vida.

Cuando los investigadores comenzaron a indagar en los asesinatos, se sorprendieron al rastrearlos hasta un traficante de drogas local de Manabí que se había elevado a la cima del comercio regional de cocaína bajo sus narices.

Gerald se había iniciado en el tráfico de drogas como "lanchero", piloteando los barcos que hacen que la ruta de la droga llegue a las costas de América Central y México. Pero cuando los investigadores comenzaron a dismantelar su red, Gerald se había convertido en uno de los traficantes más poderosos, no solo en Ecuador, sino también en el suroeste de Colombia. Había ascendido en la cadena de suministro un eslabón a la vez hasta el punto en que estaba comprando su propia cocaína en Colombia y coordinando el transporte de toda la ruta a Guatemala, donde sus propios compradores estaban esperando.

Según las autoridades estadounidenses, en el momento de su arresto, Gerald había traficado al menos 250 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, mientras que las interceptaciones de comunicaciones presentadas como prueba ante el tribunal mostraban que enviaba de 3 a 4 botes a la semana, cada uno de los cuales ser capaz de transportar hasta una tonelada de cocaína.

Si bien gran parte de los negocios de Gerald se realizaban en Colombia, en Ecuador se concentró en hacer de su provincia natal de Manabí un espacio seguro para su familia y su dinero. Construyó una red que no solo podía traficar drogas, sino también lavar dinero, ejercer el poder armado y manipular el estado.

Se sospecha que tres miembros claves de esta red estaban detrás de los eventos que llevarían a la exposición de Gerald en Ecuador: un capitán de policía, un abogado de derechos humanos y un narcotraficante.

El trabajador de la construcción asesinado fue engañado. Gerald había actuado sobre una supuesta inteligencia policial que no existía. La fuente de la información, según documentos judiciales, fue el capitán de policía Freddy Zambrano Herrera.

Zambrano supuestamente comenzó su carrera criminal como guardaespaldas de un capo de la droga mientras trabajaba en una unidad policial corrupta de operaciones especiales que brindaba seguridad a los narcotraficantes y sus operaciones. Tras ser trasladado a Manabí, lideró una red de corrupción dentro de la Policía al servicio de Gerald.

Zambrano estaba casado con Olga Rosalía Machuca Mera, una abogada de derechos humanos que se postuló para el Congreso en 2017 en una campaña financiada por Gerald, según testigos en su juicio. Machuca fue un punto clave de contacto entre Gerald y el mundo legal.

Se cree que la pareja tramaba el complot para robar el dinero y luego culpar al trabajador de la construcción junto con uno de los lugartenientes de mayor confianza de Gerald: Fito.

Fito, líder de la antaño temible pandilla Los Choneros, dirigía las operaciones desde su celda en la prisión, aparte de los cuatro meses que pasó prófugo en 2013 tras una espectacular fuga. Inicialmente, Gerald buscó a Fito por su conocimiento íntimo del lavado de dinero y por su red armada, que brindaba seguridad a las operaciones y escondites de Gerald. Sin embargo, pronto se convirtió en una parte integral de la maquinaria de Gerald, y las pruebas presentadas ante el tribunal muestran que Fito lava dinero, supervisa envíos de drogas y organiza paradas de reabastecimiento de combustible para los barcos de drogas de Gerald.

Después de rastrear el asesinato de Gerald, las autoridades de Ecuador comenzaron a trabajar en estrecha colaboración con sus homólogos colombianos para rastrear su red, y fue en Colombia donde finalmente fue capturado en abril de 2017. Los investigadores confiesan que esta era su opción preferida ya que temían que la protección de la que disfrutaba en Ecuador probablemente lo dejaría en libertad.

Sin embargo, mientras dejaban a Gerald por los colombianos, los investigadores ecuatorianos apuntaron a su red en Manabí. Detuvieron a 11 personas, entre ellas el capitán Zambrano, Rosalía Machuca y la esposa de Gerald, Julia Mero García.

Gerald respondió a su arresto y la captura de su familia y aliados contraatacando en todos los frentes. Contrató a una multitud de abogados penalistas, puso en marcha su máquina de corrupción y elaboró una lista negra.

En su celda de la prisión en Bogotá, Gerald recibió una corriente de abogados de los Estados Unidos, Ecuador y Colombia, recibió las visitas de al menos 26 abogados.

El ejército de abogados de Gerald lanzó una andanada de juicios en Colombia y Ecuador en un intento de evitar la extradición a los Estados Unidos. También aprovechó sus contactos con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes habían sido sus principales

proveedores de cocaína y en ese momento estaban entregando sus armas como parte de su proceso de paz con los colombianos. En donde Gerald compró su lugar en una lista de combatientes desmovilizados que debían recibir amnistía, pero las autoridades colombianas lo descartaron rápidamente.

En Ecuador, los esfuerzos de Gerald comenzaron pidiendo favores a uno de los gigantes de la política ecuatoriana: José Serrano, según denuncia hecha por uno de los abogados de Gerald, Luigi García Cano.

Serrano fue ministro del Interior durante la administración anterior encabezada por el presidente Rafael Correa. Se le atribuye ampliamente la supervisión de una notable caída en los niveles de violencia durante su tiempo como ministro, y fue condecorado por la DEA por incautaciones récord de drogas bajo su mandato. Este ha sido acusado de corrupción, abuso de poder e incluso secuestro, y en Ecuador hay un murmullo constante de rumores de su participación en temas más complicados aun.

Al momento del arresto de Gerald, Serrano ya no era ministro de gobierno, pero era presidente de la Asamblea Nacional. Según García, Serrano lo convocó a una reunión en un hotel Marriott en Quito. En 2019, García describió cómo Serrano le había preguntado si sabía de Gerald, antes de decirle que iba a defender al traficante arrestado, a quien Serrano llamó y habló por teléfono al frente de García. Sin embargo, los intentos de Gerald de evitar el juicio en Estados Unidos no tuvieron éxito y, en febrero de 2018, fue extraditado.

Mientras tanto, el equipo legal reunido en Ecuador había estado trabajando en la libertad de su esposa Mero. Dentro de la prisión, Mero tenía su propia habitación privada y seguridad y tenía empleados que le llevaban dinero y tarjetas SIM de teléfonos celulares.

El equipo de Mero apuntó a la jueza que debía presidir su primera audiencia. Un informe detalla cómo el juez informó haber sido presionado por un alto funcionario del órgano que supervisa el poder judicial de Ecuador, el Consejo de la Judicatura. El funcionario supuestamente le ofreció una gran suma de dinero para cerrar el caso y retirar los cargos contra Mero.

Pronto quedó claro cuán grande era la suma que se ofrecía, cuando uno de los abogados de Gerald se acercó al juez y le ofreció \$ 5.7 millones de dólares por el fallo. Ante la negativa del juez, la funcionaria del cabildo buscó reemplazarla para el juicio.

Cuando su soborno fracasó, los abogados recurrieron a la demora, postergando audiencia tras audiencia. Uno de los jueces involucrados presentó un informe exigiendo que se investigara si la defensa se estaba demorando hasta que los acusados hubieran estado en prisión preventiva el tiempo que permitía la ley, por lo que tendrían que quedar en libertad.

Pero la red de Gerald no solo estaba enfocada en trabajar el sistema legal. En junio, Gerald envió a un sicario desde Colombia. Las autoridades detuvieron al asesino antes de que pudiera actuar y encontraron en su billetera los nombres y direcciones de dos policías que trabajaban en el caso.

La policía no era su único objetivo. Las autoridades también obtuvieron lo que dijeron era una lista que incluía los nombres de un fiscal, un miembro de la asamblea de Manabí y el nombre "Serrano", por quien Gerald había ofrecido una recompensa de \$ 2 millones.

Las condenas tanto para Gerald como para su red llegaron en 2018. Y aunque Gerald recibió 19 años en los Estados Unidos, las sentencias dictadas a su red fueron una clara ilustración de la impunidad que tenían los investigadores.

Mero fue sentenciado en enero. Ella y los otros acusados habían aceptado acuerdos de culpabilidad, en los que los cargos se redujeron de tráfico de drogas a crimen organizado. Mero y Fito recibieron 28 meses, mientras que los demás acusados, incluida Rosalía Machuca, recibieron 20 meses. Con los meses descontados por el tiempo cumplido, la sentencia ascendió a poco más de un año.

El único integrante que no se benefició fue el Capitán Zambrano, quien no formaba parte del mismo caso. En junio de 2017, Zambrano fue encontrado colgado de una soga de sábanas en su celda de la prisión, pero aún con vida. Un portavoz del Ministerio de Justicia lo calificó como un intento de suicidio "normal" debido al "estrés de la prisión".

Aunque no surgieron pruebas de más corrupción en las sentencias, sobornar a fiscales y jueces para reducir los cargos y luego aceptar un acuerdo de culpabilidad con el tiempo cumplido es una característica común de la corrupción desenfrenada en el sistema judicial de Ecuador. Un fiscal furioso habló por radio para calificar la sentencia como "una broma".

Sin embargo, incluso entonces, Mero no estaba satisfecho. Poco después de su arresto, las interceptaciones telefónicas muestran a Mero discutiendo cómo uno de los abogados de Fitos dijo que tenía conexiones con funcionarios públicos que podrían asegurar la liberación de Mero a través de una petición de hábeas corpus, por el precio justo. Un año después, y eso fue exactamente lo que sucedió.

En abril de 2018, Mero presentó un recurso de hábeas corpus. En diez horas, los tres jueces que recibieron el expediente lo revisaron, celebraron una audiencia, aceptaron su petición y la pusieron en libertad.

El fallo fue revocado menos de una semana después. Mero fue recapturado y los jueces involucrados fueron detenidos y acusados de pervertir el curso de la justicia. Sin embargo, en cuestión de semanas, los jueces quedaron libres tras una resolución de la Corte Constitucional que concluyó que los jueces a nivel nacional no pervierten el curso de la justicia.



Mientras Gerald y su esposa libraban sus batallas legales, también tenían otra preocupación su negocio y su dinero.

Durante las redadas que siguieron al arresto de Gerald y Mero, las autoridades sacaron efectivo una y otra vez. Estaban los \$7.5 millones escondidos en un garaje, \$1 millón debajo de un basurero, \$3.1 millones en una casa en la ciudad de Manta. En total, incautaron \$12 millones. Sin embargo, el valor estimado de Gerald asciende a cientos de millones e incluso podría alcanzar los mil millones de dólares.

La responsabilidad de administrar el tesoro oculto de Gerald recayó en el único miembro de la red que había escapado de las redadas: la hermana de Gerald, Betsy. Las interceptaciones telefónicas muestran cómo Betsy administró fondos e incluso continuó traficando drogas en 2017.

En septiembre de 2017, sin embargo, llegó la primera señal de que Gerald estaba perdiendo el control dentro del inframundo cuando fue asesinado su hermano, que se había estado escondiendo en un pequeño pueblo en el distrito cafetalero del centro de Colombia, comprando la tierra con un nombre falso. Y luego, llegó Fito. El hombre que tenía un conocimiento íntimo de las casas de seguridad y las finanzas de Gerald. Betsy se entregó a las autoridades días después del ataque que dejó a su esposo muerto y a su hijo herido. En agosto de 2019 recibió una condena de cinco años por enriquecimiento ilícito.

Los intentos de Gerald de asegurar su libertad, mientras tanto, continúan hoy. Las denuncias contra el exministro Serrano surgieron en agosto de 2019, en una denuncia penal interpuesta por el exabogado de Gerald.

García describió cómo decidió presentar la denuncia después de las amenazas contra su vida. En marzo, asegura, llegó la llamada del exministro, en la que Serrano lo amenazó con guardar silencio sobre su reunión, diciéndole “usted no sabe con quién está tratando”. Luego, en agosto, personas que García sabía que estaban conectadas con el crimen organizado le dijeron que Gerald había puesto precio a su cabeza y que su asesinato era una condición de José Serrano para ayudar a Gerald con sus problemas legales en los Estados Unidos.

Si bien Gerald continúa usando sus millones ocultos para tratar de comprar la libertad, los encargados de proteger su riqueza pronto pueden recuperar la suya, pero a riesgo de sus vidas. Fito sigue dirigiendo una red de hombres armados desde su celda, y está a punto de embarcarse en una violenta búsqueda del tesoro que podría dejar aún más víctimas en la saga del ascenso y la caída de Gerald.

La ironía del narcocorrido en honor a Telmo Castro es, en el mejor de los casos, trágica. La canción se jacta de las proezas criminales del excapitán del ejército ecuatoriano, quien en ese momento estaba en prisión acusado de tráfico de drogas para el Cartel de Sinaloa de México. “No lograrán encerrar a la fiera salvaje por mucho tiempo”, remata .

Pero en diciembre de 2019, el cuerpo de Castro fue encontrado en su celda de prisión en Guayaquil, Ecuador; desnudo, atado de pies y manos, y con 15 puñaladas.

Para Ecuador, la muerte de uno de los narcotraficantes locales más notorios del país fue el final de una era. Pero para sus jefes mexicanos, la muerte de Castro hará poco para interrumpir su próspero negocio de cocaína a través de Ecuador.

Telmo Castro, también conocido como "El Capi", dio sus primeros pasos en el inframundo alrededor del cambio de siglo, cuando estaba destinado con la inteligencia militar en la provincia selvática de Sucumbíos, en la frontera nororiental de Ecuador con Colombia. Allí, hizo conexiones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC en ese momento estaban haciendo lo que el ejército ecuatoriano no podía poner orden en la región fronteriza sin ley. También se estaban metiendo cada vez más en el tráfico de cocaína. Moviéndose en este mundo, Castro pronto entró en contacto con traficantes mexicanos del Cártel de Sinaloa, que habían estado comprando cocaína en el sur de Colombia y comenzaban a explorar formas de traficarla a través de Ecuador. A mediados de la década, los sinaloenses habían construido una extensa red de traficantes en el país y Castro era parte integral de su maquinaria.

El hombre detrás de la red era Jorge Cifuentes, un narcotraficante colombiano que fue lugarteniente de confianza del Cártel de Sinaloa, pero que luego se convertiría en testigo estrella en el juicio contra el líder del cártel Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

Las investigaciones describen cómo, desde su base en Quito, la capital de Ecuador, Cifuentes construyó una red de proveedores y dueños de laboratorios de cocaína en la región fronteriza, y redes de transporte y despachadores ecuatorianos, que enviaban cargamentos por aire o mar. Cifuentes también montó varias empresas en Ecuador como fachada de su negocio y para lavar las ganancias.

Dentro de esta red, el trabajo de Castro era recoger cargamentos de droga en la región fronteriza y transportarlos a los puntos de despacho. Lo hizo usando vehículos militares escoltados por personal militar. Por este servicio cobraba 100 dólares el kilo, llegando a pagar hasta 600.000 dólares por vez, según el testimonio de Cifuentes en el juicio de El Chapo.

La suerte de Castro se acabó por primera vez en 2009, cuando fue detenido mientras escoltaba más de media tonelada de cocaína. En ese momento, ya no estaba en servicio activo con el ejército, pero fue arrestado en un vehículo pintado de verde con logotipos militares en el cuerpo. Castro fue condenado a dos años de prisión. Sin embargo, pronto quedó en libertad luego de que su primera sentencia se redujera a 20 meses, y luego se le otorgó la libertad anticipada por haber cumplido el 49 por ciento de su condena. El costo de su libertad

fue de \$ 500,000 en sobornos. Los sinaloenses pagaban a los jueces ecuatorianos, según denuncias hechas por el hermano de Cifuentes, Alex, en el juicio de El Chapo.

Poco después de su liberación, la red sinaloense en Ecuador comenzó a fragmentarse. Con las autoridades internacionales tras todo el clan traficante de Cifuentes, Jorge Cifuentes salió de Ecuador y se refugió en Venezuela, donde finalmente fue detenido en 2012 . Castro se levantó en el vacío. Ya no era un simple transportista, comenzó a hacer sus propias compras de cocaína y organizaba su despacho en avionetas realizando vuelos clandestinos, dando al parecer el inicio al cartel de los soles en Venezuela.

Sin embargo, con una mayor responsabilidad vinieron no solo mayores ganancias sino también mayores riesgos. Después de que las autoridades incautaran varios de los aviones de Castro cuando se preparaban para despegar cargados con cocaína, los mexicanos lo secuestraron y exigieron el pago de sus pérdidas.

Castro fue liberado luego de entregar varias propiedades a sus captores. Condonada su deuda, volvió al trabajo, consolidándose como el narcotraficante estrella de los sinaloenses por la vía aérea.

Sin embargo, en 2013, un equipo de vigilancia policial que vigilaba una pista clandestina vio primero acercarse un camión y depositar combustible. Luego aterrizó un avión Cessna y dos mexicanos bajaron del avión. Vieron como apareció Castro, habló con los mexicanos y luego se fue. Poco después llegó otro camión, pero al detectar la presencia policial se dio la vuelta e intentó escapar, disparando a los policías para detenerlos. La policía obligó al camión a detenerse y encontró en su interior alrededor de media tonelada de cocaína.

Castro fue detenido y un año después fue condenado a diez años y ocho meses por tráfico de drogas. En 2017, recibió otros cinco años por lavado de dinero a través de una red de empresas fachada y cuentas ficticias, que contenían depósitos de más de \$1 millón.

Castro continuó coordinando narco aviones desde su celda en prisión. Ciertamente retuvo influencia en el inframundo, ya que pronto volvió a ser libre después de otro fallo judicial sospechoso.

En agosto de 2018, Castro fue liberado después de cumplir el 40 por ciento de su condena, a pesar de que este beneficio solo se ofrece a los reclusos de mínima seguridad, no a los que como Castro están internados en instalaciones de máxima seguridad.

Al principio, la liberación de Castro pasó desapercibida. Pero después de que las revelaciones de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa en el juicio de El Chapo llevaron a los medios locales a publicar informes sobre su paradero actual, pronto fue arrestado nuevamente. Se abrió una investigación por corrupción a la jueza que

lo liberó aunque medio año después ella se mantuvo en su cargo dictando controvertidos fallos liberando a los delincuentes.

Sin embargo, para los mexicanos y su flujo de cocaína, hizo poca diferencia. Cuando Castro regresó a prisión para comenzar el capítulo final de su vida, las operaciones de tráfico del Cartel de Sinaloa habían avanzado hacia mucho tiempo.

Ya no existe una red fija de operadores de Sinaloa con sede en Ecuador. En cambio, muestran operaciones que son ágiles y de bajo perfil, organizadas por pequeñas células de mexicanos que ingresan al país, establecen la logística del tráfico con estructuras locales, supervisan las operaciones y luego salen del país.

Usando este modelo de subcontratación, los mexicanos ya no necesitan una infraestructura criminal extensa y grandes redes, solo necesitan contactos. Esta división en células descentralizadas y la rotación de personal les permite operar por debajo del radar y adelantarse a las autoridades.

Castro está muerto, y los capos de la droga para los que trabajaba, Jorge Cifuentes y El Chapo están en prisión. No habrá narcocorridos cantados por los que los han reemplazado en Ecuador. Y, sin embargo, es probable que el Cártel de Sinaloa esté moviendo más cocaína que nunca a través del país.

Ecuador se encuentra en una posición estratégica para el tráfico de cocaína. Y con el auge de la producción de cocaína en Colombia y los cambiantes patrones de consumo en todo el mundo, el país se ha vuelto aún más importante para los mercados heredados como Estados Unidos y los mercados emergentes de cocaína en Europa y Asia.

Esto se refleja en los datos. En 2015, las autoridades ecuatorianas incautaron 63 toneladas de cocaína. Durante los siguientes dos años, se incautaron más de 80 toneladas anuales. En 2018, como resultado del Proceso de Paz colombiano, solo se decomisaron 35 toneladas. Pero las incautaciones aumentaron nuevamente en 2019 y el país alcanzó un récord en 2021 cuando incautó 210 toneladas de cocaína. Desde entonces, los números se han mantenido altos; en 2022, Ecuador incautó cerca de 180 toneladas de cocaína.

A medida que la ruta del narcotráfico de Ecuador ha ganado popularidad, los flujos de capital han aumentado, lo que ayudó a impulsar el crecimiento de los grupos criminales del país. Como se indica a continuación, también aumentó la competencia.

Durante varios años, el panorama criminal de Ecuador ha pasado de tener solo un puñado de bandas criminales locales a decenas de grupos criminales sofisticados y violentos, cada uno compitiendo por el control de las prisiones del país y las lucrativas rutas de drogas que han convertido al país en una autopista de la cocaína .

Entre esos primeros grupos estaban los Choneros, que surgieron a fines de la década de 1990 como un grupo narcotraficante en la ciudad costera de Manabí. El grupo se convirtió en una de las pandillas más grandes y poderosas del país a través de alianzas con actores clave en el narcotráfico como Washington Prado Alava, alias "Gerald".

Sin embargo, luego de un período de rápida expansión, la marea se volvió en contra de los choneros. Después del asesinato del líder de Choneros, Jorge Luis Zambrano González, alias "Rasquiña", en diciembre de 2020, grupos más pequeños, que alguna vez operaron bajo el paraguas de Choneros, tomaron el poder por sí mismos.

Lo que vino después fue una ola de masacres dentro de las cárceles del país. La violencia pronto llegó a las calles de Ecuador. Desde entonces, una confederación de pandillas, que incluye antiguos aliados como los Tiguerones y Chone Killers, liderada por Los Lobos, un grupo disidente de los Choneros, ha disputado el poder del grupo dentro y fuera de las cárceles desde entonces.

Las tasas de homicidio se dispararon, creciendo un 86,3% en 2022, y según cálculos un 74 % en la primera mitad de 2023.

Como parte de sus tácticas cada vez más violentas, estas bandas se han apropiado del uso del sicariato. Muchos observadores ven esto como parte de la tercera razón del aumento de la violencia: la presencia de organizaciones criminales extranjeras.

Durante años, Ecuador fue competencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la insurgencia más antigua de Colombia. Las FARC controlaban los puertos de salida de cocaína en el sureño departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador. La fumigación de cultivos y la persecución de las FARC trasladaron las operaciones de la guerrilla a Ecuador, donde encontraron aliados políticos y delincuenciales para el contrabando de cocaína, así como un lugar donde esconderse.

Las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016-2017, allanando el camino para que grupos disidentes, también conocidos como ex-FARC mafia, se apoderen de los territorios de las exguerrilleras. A lo largo de la frontera con Ecuador, esto se centró en el control del tráfico de cocaína y resultó en una estela de violencia.

Desde la década de 2000, los grupos mexicanos también han estado estableciendo conexiones entre las redes de tráfico de cocaína y los emisarios mexicanos para asegurar el flujo de la droga a Estados Unidos y México. El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (Cártel Jalisco Nueva Generación - CJNG) han formalizado alianzas con grupos como los Choneros, así como con otras pandillas del país.

Los grupos de Europa del Este también han estado involucrados en Ecuador durante más de una década, a través de conexiones con grupos nacionales y transnacionales extendiendo sus redes allí.

Estos grupos han proporcionado a las pandillas locales armas y dinero que han alimentado sus disputas territoriales. De hecho, se cree que al menos parte del aumento de la violencia en el país está relacionado con los esfuerzos de los grupos locales por mantener el control de corredores de drogas específicos donde operan grupos extranjeros.

A medida que aumenta la violencia en el país, el gobierno ecuatoriano ha demostrado que no está preparado para enfrentar una amenaza criminal de esta escala.

Desde 2022, las amenazas y ataques a fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se han convertido en algo común en Ecuador. El reciente ciclo de elecciones legislativas y locales también ha estado plagado de violencia. En julio, Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional, fue asesinado en la norteña provincia de Esmeraldas.

Ese mismo mes, Agustín Intriago, alcalde de Manta, en la provincia de Manabí, fue asesinado cuando inspeccionaba una obra de infraestructura pública en la colonia 15 de septiembre. Y en mayo, el alcalde de Durán, en la provincia de Guayas, sobrevivió a un atentado. Sumado a la muerte del precandidato a la presidencia para los actuales comicios presidenciales.

Hasta el momento, el gobierno ha recurrido a implementar estados de emergencia y aumentar la capacidad de las cárceles del país. Sin embargo, como muestra el asesinato de Villavicencio, estas medidas no han frenado la violencia ni socavado significativamente el poder de las pandillas.



Los Lobos se han convertido en la segunda megapandilla más grande de Ecuador, con más de 8.000 miembros repartidos por las prisiones de Ecuador. El grupo ha estado involucrado en varias masacres carcelarias devastadoras en el país, que mataron a más de 315 reclusos solo en 2021.

El deterioro de la posición de los Choneros como la organización criminal predominante en Ecuador ha dejado espacio para que los Lobos tomen el control de una poderosa federación de pandillas que incluye a los Tiguerones y Chone Killers y compitan por el control de las cárceles de Ecuador desde donde el narcotráfico de la nación, conectado a grupos del crimen organizado colombiano y mexicano, está dirigido. La pandilla también se ha vuelto muy activa en la industria de la minería ilegal.

Como muchas de las pandillas de Ecuador, los Lobos comenzaron como un grupo escindido del grupo criminal más destacado de Ecuador, los Choneros. Los principales rivales de los Choneros habían sido los Cubanos y los Lagartos, ambas importantes bandas carcelarias. Pero la muerte de los líderes de ambas bandas asestó un duro golpe a las capacidades de las organizaciones. Luego, el asesinato en 2020 del líder de Choneros, Jorge Luis Zambrano , alias "Rasquiña", dejó un vacío en el liderazgo de la organización criminal dominante de Ecuador.

Reconociendo la posición debilitada de los Choneros, varias pandillas y facciones previamente aliadas con el grupo más grande rompieron filas y forjaron una nueva alianza para luchar contra la debilitada mega-pandilla. Estos grupos más pequeños incluyen a los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones . Se refieren a sí mismos colectivamente como la Nueva Generación en referencia a sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México (Cártel Jalisco Nueva Generación - CJNG ). Los Lobos y sus aliados han brindado seguridad y armas al CJNG desde 2016, mientras que los Choneros hacen lo mismo con el otro gran grupo criminal de México, el Cartel de Sinaloa. Esta batalla por el control de las rutas de tráfico de cocaína en Ecuador está impulsando gran parte de la violencia del país.

En febrero de 2021, Nueva Generación lanzó ataques coordinados contra el liderazgo fragmentado de los Choneros, teniendo como objetivo a los dos posibles sucesores de Rasquiña, alias "JR" y alias "Fito", durante motines en las cárceles. Ambos lograron sobrevivir, pero los disturbios dejaron otros 80 presos muertos.

En una importante escalada de violencia, 119 presos fueron asesinados en motines carcelarios en septiembre de 2021 cuando los Choneros y los Lobos se enfrentaron en la prisión de Guayaquil Litoral en el sur de Ecuador. El mismo año, las autoridades incautaron decenas de armas de grueso calibre en prisiones controladas por los Choneros, los Lobos y Lagartos, lo que indica que un mayor flujo de armas estaba ingresando a Ecuador y terminando en las prisiones del país.

En noviembre de 2021, funcionarios ecuatorianos culparon al Cártel de Sinaloa y al CJNG por apoyar a los Choneros y Nueva Generación y suministrarles armas antes de varios días de disturbios en las cárceles en los que perecieron 68 reclusos.

La violencia ha continuado sin cesar a lo largo de 2022. En abril, estallaron disturbios en la prisión de Turi, cerca de la ciudad sureña de Cuenca, y se cobraron 20 vidas. Alexander Quesada, alias "Ariel", líder de los Lobos y Marcelo Anchundia, líder de una pandilla rival más pequeña, la R7, supuestamente estarían detrás de la violencia. El R7 había apoyado inicialmente a los Lobos, pero se separó tras el deterioro de la relación de los líderes.

Tras los disturbios de Turi, tanto Ariel como Anchundia solicitaron traslados. Ambos fueron trasladados a un penal de máxima seguridad en Guayaquil pero continuaron recibiendo amenazas contra sus vidas. Anchundia fue trasladado al penal de Bellavista en Santo Domingo de Los Tsáchilas, cerca de Quito. Ariel ordenó otro atentado contra la vida de su rival, lo que provocó disturbios en Bellavista y la muerte de 44 presos.

Luego, en noviembre, los Lobos y sus aliados, los Tiguerones, estuvieron detrás de una ola de violencia en todo el país, en la que mataron a policías, detonaron coches bomba y dejaron cuerpos colgando de los puentes. Estos ataques fueron provocados por las pandillas que trasladaron a muchos de sus miembros fuera de la prisión de Litoral de Guayaquil, lo que, temían, resultaría en una pérdida de control criminal e ingresos. Las dos bandas emitieron panfletos advirtiendo de brutales represalias si continuaban los traslados.

Los Lobos también han sido despiadados a la hora de eliminar a su oposición. En diciembre de 2022 y febrero de 2023, la pandilla intentó asesinar repetidamente a Junior Roldán, alias 'JR', uno de los fundadores de Choneros, antes de que lo mataran en circunstancias inciertas en Colombia en marzo de 2023.

El líder de Lobo era Wilmer Chavarría, alias "Pipo", quien operaba desde el penal de Turi en Cuenca. La policía cree que Pipo fue asesinado en un motín en la prisión de 2021 en el que 34 reclusos fueron asesinados.

Desde lo de Pipo y su presunta muerte, Alexander Quesada, alias "Ariel", es ampliamente considerado el líder de la pandilla. Se ha descrito que Ariel tiene un comportamiento agresivo, lo que supuestamente provocó su enemistad con Anchundia, líder de la pandilla R7.

Dado su papel, Ariel presumiblemente influye en los Tiguerones y Chone Killers, ambas fuertes pandillas con base en la provincia norteña de Esmeraldas y la provincia sureña de Guayas, respectivamente.

Los Lobo operaban principalmente en las ciudades de Latacunga y Cuenca, en la provincia amazónica de Pastaza, y en la localidad costera de Machala.



Sin embargo, desde que comenzaron a adquirir prominencia en todo el país, los Lobo han establecido una fuerte presencia en las prisiones de máxima seguridad del país. Los lobos están en el control total de la cárcel de Turi en Cuenca, que alberga a cerca de 1.600 presos. También tienen una influencia dominante en las cárceles de Sierra Centro y Cotopaxi en las afueras de Latacunga. En el penal del Litoral de Guayaquil, el más grande del país, controlan las alas 8 y 9. Los Lobo mantienen también una fuerte presencia en prisiones más pequeñas en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y El Oro.

La principal fuente de ingresos de los Lobo proviene del movimiento de cocaína comprada por carteles mexicanos a grupos colombianos y peruanos a través de Ecuador.

Ecuador se ha convertido en una cinta transportadora de la cocaína colombiana que se dirige a los EE. UU. y Europa, y casi un tercio de la cocaína de Colombia sale de América del Sur a través de puertos ecuatorianos. Los Lobos y otras pandillas ecuatorianas han ayudado a aumentar el papel de Ecuador en el tráfico de cocaína.

Las actividades criminales de los Lobo incluyen asegurar cargamentos de drogas en ciudades portuarias, servir como cobradores de deudas y trabajar como sicarios o asesinos para socios internacionales o grupos aliados. En los últimos meses, las autoridades ecuatorianas han descubierto laboratorios de procesamiento de cocaína en Ecuador, lo que indica una posible evolución de megapandillas como los Lobos hacia lo que las autoridades han denominado "microcarteles".

Los Lobo también participan en el microtráfico en las ciudades de Ecuador, principalmente Quito, Guayaquil y Quevedo. En marzo de 2021, doce miembros de Lobos fueron aprehendidos y acusados de diversos delitos, entre ellos microtráfico, extorsión, robo y posesión ilícita de armas de fuego. En febrero de 2022, las autoridades ecuatorianas arrestaron a diez presuntos miembros de Lobos por cargos de secuestro y asesinato.

Los Lobo también han establecido el control de gran parte del sector de la minería ilegal en Ecuador, convirtiéndolo en un firme pilar de sus ingresos criminales. Los pandilleros han tomado el control de las regiones de extracción ilegal de oro en la provincia norteña de Imbabura, cobrando un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos.

Los Lobos y otras megapandillas han logrado dominar y penetrar el sistema penitenciario a través de la corrupción masiva de funcionarios penitenciarios y esquemas de soborno que llegan hasta los directores de prisiones. La falta de infraestructura y financiamiento en muchas prisiones en todo Ecuador ha dado a las pandillas el control de las instalaciones, a menudo controlando el movimiento y la seguridad dentro de los pabellones.

La violencia en las cárceles controladas por pandillas de Ecuador refleja la lucha del grupo por controlar las rutas de tráfico de drogas fuera de los muros de la

prisión. Los disturbios en las prisiones suelen ser guerras de poder entre grupos, en las que los Lobo utilizan la violencia como represalia por los enfrentamientos en el exterior.

Los Lobo tienen conexiones con otros actores internacionales y están vinculados a grupos criminales balcánicos, especialmente albaneses. Nueva Generación obtiene la cocaína que trafican a través de las ciudades portuarias de Ecuador del Frente 48, una facción disidente de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ).

Ecuador tiene el tercer nivel más alto de incautaciones de cocaína en el mundo después de Colombia y Estados Unidos, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto significa más cocaína, más dinero y más armas fluyendo por las manos de las pandillas de Ecuador, incluidos los Lobos.

En los últimos tres años, los Lobos han jugado un papel clave en el colapso de la seguridad en Ecuador, lo que llevó al país a tener el aumento de la tasa de homicidios más alto de América Latina en 2021. Los Lobos y sus aliados han ayudado a traer tácticas criminales a Ecuador que el país rara vez había visto, incluidas espantosas masacres en prisiones, una normalización de los asesinatos por contrato, el uso de coches bomba, ataques masivos contra la policía y cuerpos colgados de puentes como advertencias.

Hay pocos indicios de que esto cambiará pronto. El gobierno de Ecuador no ha aportado ninguna idea fresca a la mesa, y los Lobos solo han crecido en fuerza.



La serie de ataques contra las fuerzas de seguridad en la provincia fronteriza del Pacífico de Esmeraldas en 2018 fue tomada como una señal de una nueva era, donde las viejas reglas de convivencia entre el Estado y el hampa estaban siendo rotas. La emboscada en Sucumbíos insinuaba todo lo contrario. Aquí, la alianza entre el bajo mundo y el mundo legal establecida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sobrevivido a la revolución armada de la guerrilla.

La capital de Sucumbíos, Nueva Loja, mejor conocida como Lago Agrio, es un hervidero de comercio clandestino. Es un lugar donde la primera pregunta que hace un abogado es “¿usted viene de abajo?” Un lugar donde muchos en la ciudad tienen dos identidades: su nombre colombiano original y su nombre ecuatoriano elegido, obtenido de notarios corruptos. Y un lugar donde las fuerzas de seguridad escoltan cargamentos de droga.

Lago Agrio comenzó a crecer de un rincón olvidado de la Amazonía a un centro regional a medida que la industria petrolera extendía sus tentáculos en la selva ecuatoriana. Pero fue la llegada de las FARC lo que transformó el pueblo. Lago Agrio experimentó un auge cuando la guerrilla impulsó el desarrollo de una economía paralela: clínicas médicas para tratar a los combatientes heridos, hoteles, bares y burdeles para atender a los guerrilleros en licencia, tiendas de suministros militares y, por supuesto, nuevas oportunidades de empleo en el narcotráfico.

Si bien parte de esta infraestructura clandestina desapareció con la desmovilización de las FARC en 2017 la demanda de asistencia médica sin preguntas las 24 horas se ha reducido drásticamente, Lago Agrio sigue siendo un centro logístico para el narcotráfico. La maquinaria de tráfico creada por la guerrilla continúa operando y es probable que esté moviendo más cocaína que nunca a través de Sucumbíos.

En Lago Agrio, hay empresarios muy adinerados que usan sus negocios para mover dinero, o ayudar con la logística, si los traficantes necesitan camiones o suministros. Si los traficantes tienen un problema con un juez o un fiscal lo pueden arreglar porque han sido diputados estatales, alcaldes y todo lo demás.

Las fuerzas de seguridad también forman parte de esta maquinaria, se paga a policías y militares para que pasen cargamentos de droga por sus puntos de control, o incluso que los escolten ellos mismos. “En Sucumbíos, si no eres corrupto, te corrompen”.

Lago Agrio es también un punto de encuentro y escala para los traficantes internacionales que buscan hacer negocios en la región fronteriza de Colombia. Como es una ciudad petrolera también hay muchos extranjeros trabajando para las petroleras, y los traficantes se pueden esconder entre ellos fácilmente.

Los traficantes europeos son los visitantes más comunes, especialmente los de la región de los Balcanes. Sin embargo, los cárteles mexicanos también hacen

negocios en la zona, y también se han visto traficantes de lugares tan lejanos como el Medio Oriente.

La cocaína que vienen a comprar los traficantes se produce al otro lado de la frontera, en el departamento colombiano de Putumayo. La mayoría de ellos harán sus tratos con una red de traficantes que domina las rutas de la droga hacia Sucumbíos: la alianza entre el grupo traficante La Constru y la ex-FARC mafia.

La alianza se forjó en el vacío del hampa que dejó la desmovilización de las FARC. Varias unidades del Frente 48 de las FARC que no participaron en el proceso de paz, sino que mantuvieron sus armas y sus territorios, incluso dentro de Ecuador.

Quizás aún más importante, también lo hicieron las milicias y las redes logísticas que habían actuado como soporte vital de las guerrillas: moviendo drogas, precursores químicos y dinero, y asegurando armas y suministros. Los milicianos no se entregaron, y ellos eran los que tenían todas las conexiones.

Inicialmente, estos remanentes de las FARC estaban a la deriva. Si bien tenían el poder y el conocimiento para administrar el tráfico de drogas a nivel local, carecían de los contactos internacionales para hacer arreglos transnacionales y del capital para mantener en movimiento el mercado de suministro.

La solución a sus problemas vino en la forma de La Constru, una red de traficantes formada durante la era de los paramilitares que se convirtió en uno de los principales socios de tráfico de drogas de las FARC. La Constru intervino para desempeñar el papel de corredor de cocaína, encontrando compradores internacionales e invirtiendo en la producción local de coca para satisfacer sus demandas.

Las ex-FARC, son ahora un ejército mercenario al servicio de La Constru. Ofrecen control territorial en zonas de cultivo y procesamiento de coca, y rutas de tráfico hacia Ecuador. Han utilizado este control armado para establecer un monopolio virtual sobre la producción de cocaína en la región fronteriza, matando a cualquiera que venda a traficantes rivales. Nadie puede mover un solo gramo sin ellos.

La Constru compra la producción, la procesa y luego la vende a las mafias internacionales. El precio que cobran depende del punto de entrega, que podría estar en la frontera, o pueden hacer arreglos para la entrega a puntos de despacho más lejanos.

Un kilo vale \$2.200, luego le agregan seguridad, transporte, proporcionarán seguridad enviando dos o tres autos para escoltar la carga o activando sus fuentes en la policía y el ejército, haciendo todo lo necesario para tener seguro todo el sector.

Solo una vez desde 1990 Sucumbíos no ha sido la provincia más violenta de Ecuador . Desde que las FARC se retiraron, han registrado una tasa de homicidios alrededor de tres veces superior a la nacional.

Aunque ya no hay una insurgencia que combatir, en muchos antiguos bastiones de las FARC, la seguridad se ha deteriorado. Antes la violencia estaba regulada por las FARC. Ejecutarían a presuntos informantes, colaboradores de paramilitares, delincuentes comunes y personas que se metían en el narcotráfico. Pero solo después de investigar sus casos. Hoy en día, no existe tal control. A lo largo de la frontera, las ex-FARC han estado en alerta máxima. Cualquier persona desconocida que ingrese al área corre el riesgo de no salir.

El bloqueo de las ex-FARC en la región fronteriza podría ser una táctica para proteger sus intereses en el narcotráfico. O podría ser una respuesta a una amenaza del este y un conflicto que se extendió por la frontera desde el 2017.

La red de ex-FARC más poderosa del país, la disidencia encabezada por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, había enviado un bloque de combatientes para tomar Putumayo. Ingresaron por el río Caquetá, antes de avanzar hacia la capital departamental Puerto Asís, donde encontraron resistencia de los grupos del ex Frente 48.

La lucha pronto se instaló en el río Putumayo, que se extiende a ambos lados de la sección este de la frontera. Las comunidades a lo largo de las orillas del río quedaron atrapadas en el combate y los residentes fueron asesinados, desplazados y reclutados.

Pero ha sido una guerra mayormente silenciosa. Las comunidades aterrorizadas están demasiado asustadas para hablar con las autoridades, y la presencia de las autoridades en la zona fronteriza es, en el mejor de los casos, efímera.

Si bien ese conflicto se calmó a principios de 2019, también ha habido violencia relacionada con conflictos internos dentro de la alianza La Constru-ex-FARC. Comenzó en agosto de 2018, cuando el exguerrillero Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, se convirtió en la cara pública del narcotráfico en la región fronteriza.

Fuentes que conocían personalmente a Sinaloa dicen que había sido un chico de los recados dentro de las FARC, pero un chico de los recados paso a ser uno de los narcotraficantes más notorios de los rebeldes, quien lo había armado con los contactos y el conocimiento para levantarse en la nueva era. No dirigió las fuerzas de las ex-FARC en la región, sino que fue comandante de uno de varios grupos distintos y autónomos del ex- frente 48.

Sinaloa se convirtió en el más notorio de esta nueva generación tras la publicación de un informe de inteligencia policial que describía su sociedad con La Constru y cómo juntos abastecían al Cártel de los Balcanes con toneladas de cocaína. Y

cuando los agentes antinarcoáticos fueron emboscados cinco meses después, fue Sinaloa quien fue culpado.

Sin embargo, la infamia de Sinaloa duró poco y en marzo de 2019 fue asesinado por sus propios hombres. La noticia de la muerte de Sinaloa fue noticia tanto en Colombia como en Ecuador, pero en Sucumbíos todo seguía como siempre.

Al igual que con el asesinato sospechoso del agente antinarcoáticos, el asesinato de Sinaloa no hizo más que reafirmar lo que se había hecho evidente desde la desmovilización de las FARC: la frontera Sucumbíos-Putumayo pertenece al hampa, y mientras cambien los nombres, el negocio seguirá.

CT (RP)

**Bernardo Molina Otalora**

Administrador Policial

TP 0205